

Valdivia, diez de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

En rol de esta Corte N°274-2021, que incide en causa R.I.T. 0-193-2021, del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno fue dictada sentencia definitiva en autos laborales caratulados «VEAS con ITAU-CORPBANCA S.A.», por la Sra. Jueza Titular de ese tribunal, doña María Isabel Palacios Vicencio, en la que resolvió:

“1.- Que SE RECHAZA la excepción de finiquito planteada por la demandada.

2.- Que SE ACOGE LA DEMANDA la demanda interpuesta por CLAUDIA GIOVANNA VEAS CISTERNA en contra de BANCO ITAU CORPBANCA S.A., ambos individualizados, declarándose injustificado el despido de que fue objeto la demandante, ocurrido el 9 de julio de 2021, condenándose a la demandada a pagar a la actora, las siguientes prestaciones laborales:

1) \$10.185.704 por incremento del 30% de la indemnización por años de servicio;

2) \$4.116.552 por devolución de descuento indebido de aporte patronal de AFC

3) Reajustes e intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código del Trabajo

4) A pagar las costas del juicio, regulándose las personales en la suma de \$1.400.000.-” (sic)

En representación de la aludida entidad demandada, interpuso recurso de nulidad dirigido contra el fallo recién transcrito, el abogado, don Benjamín Traviesa Lucchini, invocando en forma subsidiaria y desde distintos enfoques una misma causal, cual lo es la del artículo 477 del Código del Trabajo, a saber: a) En forma principal, en aquella primera parte del inciso primero del citado precepto que indica: *“Cuando en la tramitación del procedimiento se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales”*, puntualmente, la garantía a un debido proceso, contemplada en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República. Y b) En subsidio, sobre la base de la



segunda parte del mismo inciso y artículo, que prescribe: "... *aquella se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo*", esta última tanto en relación con los artículos 168, 161 y 163 de igual texto, como en lo atinente a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.258.

Con fecha cuatro de enero recién pasado tuvo lugar la audiencia llevada a cabo en plataforma virtual, con asistencia del letrado que promovió el recurso, ya singularizado, quien concurrió a sostenerlo, en tanto, contra el arbitrio, el abogado don Claudio Márquez Oyarzún, tras lo cual la causa quedó en estado de pronunciar el acuerdo que a continuación se desarrolla.

OÍDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que constituye útil ejercicio preliminar al examen puntual de los motivos de invalidación esgrimidos, dejar esclarecido que la nulidad laboral tiene por objeto asegurar el respeto a las garantías y derechos fundamentales, o bien, conseguir sentencias ajustadas a la ley, como se desprende del tenor de los artículos 477 y 478 del Código del Trabajo, lo cual estará determinado por la causal escogida para ser invocada al efecto.

Tampoco debe obviarse que este recurso tiene un carácter extraordinario, cualidad que se evidencia en la excepcionalidad de los presupuestos sobre cuya base se edifica cada una de las causales previstas por el legislador del ramo, lo cual está en directa relación con el fin perseguido por ellas, implicando un congruente impacto en los márgenes de la competencia material de los tribunales superiores, cuya revisión queda constreñida por las mismas, imponiendo por ende a quien recurre el deber de ser preciso en el fundamento de las que ha optado por someter al criterio jurisdiccional.

De lo anterior se sigue que enfrentamos un arbitrio de derecho estricto, el cual ha de ajustarse cabalmente a la normativa que lo regula, por lo que su procedencia estará siempre determinada, tanto por la naturaleza de las resoluciones impugnadas, como por las causales expresamente establecidas en la ley y, en último término, por las formalidades que debe cumplir el libelo recursivo, en lo atinente a la manera de formulación de esos motivos, en este caso, uno en



subsidio del otro; lo cual, de paso, condicionará el orden del escrutinio a desarrollar en este fallo.

I.- En cuanto a la causal del artículo 477 inciso primero y primera parte del Código del Trabajo, en relación al artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO: Que inicialmente incumbe ocuparse del tópico de anulación invocado por el recurrente, que se verifica *“cuando en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales”*, el cual, en lo esencial, se halla orientado por el reclamo de afectación de un debido proceso legal, al haber atribuido a la magistrada del grado haber impedido ofrecer elementos de acreditación destinados a demostrar circunstancias ligadas a la causal de despido involucrada, lo que fue consecuencia de la negativa de acceder a una reposición que incluyera un punto de prueba sugerido por él en la audiencia preparatoria, precisamente dirigido a determinar si el desempeño de la trabajadora cumplía o no el estatuto previsto en el inciso segundo del artículo 161 del Código del Trabajo. Se precisa, que el tribunal tuvo por fundamento de su decisión negativa el no haberse mencionado hecho alguno en la carta de despido, de manera que por ende se estimó que no era procedente fijar algún punto de prueba en tal sentido, olvidando la jueza, a su parecer, que a diferencia de una acción por despido injustificado, en el caso del inciso segundo del citado artículo -desahucio escrito del empleador- no se requiere expresión de causa y las formalidades se cumplen notificando al trabajador y entregándole la carta de despido en comento, por lo que no podía sino establecerse si tal hecho se enmarcaba en esa clase de cesación del vínculo laboral respecto de la agente de sucursal concernida. Agrega que la resolución judicial impidió así la prueba de subsunción de la situación dentro de la causal del mentado artículo 161, traduciéndose en la acogida de la demanda con vulneración flagrante del artículo 19 N°3 inciso sexto de la Carta Fundamental, en lo que toca al derecho a un proceso previo legalmente tramitado. Trae a colación jurisprudencia del propio tribunal en sentido opuesto y similar caso en rol O 6270-19 y 3441-19. Culmina pretendiendo sea acogido el recurso de nulidad, producto



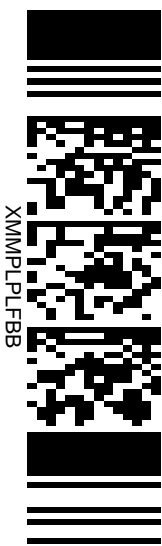
de lo cual se invalide la tramitación del procedimiento y la sentencia definitiva, al haberse infringido sustancialmente el derecho o garantía constitucional del debido proceso en la forma expuesta, ordenando se retrotraigan los autos al estado de celebrar una nueva audiencia preparatoria.

TERCERO: Que bien sabido es que el debido proceso legal, efectivamente reconocido por el Constituyente en el inciso sexto del numeral 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, sin definir técnicamente aquello en lo que consiste, incluyó el empleo de una fórmula amplia, a saber: *“Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos”*.

Empero, tal garantía ha sido llenada de contenido por la doctrina y la jurisprudencia, dotándola de variados elementos, entre los que de modo reiterado se suele encontrar: el derecho a un juez independiente e imparcial, el derecho al juez natural, el derecho de defensa, el derecho a un debido procedimiento y el derecho a obtener una sentencia motivada.

CUARTO: Que, en este sentido, debe desentrañarse si la denunciada actuación de la juzgadora del tribunal de primer grado, puntualmente desplegada durante el curso de la audiencia preparatoria del juicio, lo cual no se debate, se erige en verdad como conculcadora de derechos o garantías constitucionales y, en específico, del que asegura a las partes un debido proceso legal. En esto no puede perderse de vista que la imputación concreta que se efectúa por el recurrente, estriba en haberse impedido incorporar un punto de acreditación con el consiguiente obstáculo para ofrecer pruebas y, por consiguiente, en la afectación indebida de un aspecto esencial del derecho de defensa, inserto a su vez dentro de la citada garantía más extensa.

A este respecto se debe dejar consignado que, si bien es efectivo que en el acta de la audiencia preparatoria de 18 de noviembre de 2021 (folio 39) sólo consta haberse fijado como punto de prueba el siguiente: *“Texto de la carta de despido y del finiquito”*, lo que pudo traducirse en impedimento parcial de rendición de la prueba ofertada por la demandada, la acusada imputación transgresora de



derechos no se configura, de suerte que la conducta de la Sra. Jueza se vislumbra ajustada a las normas previstas por el Código del Trabajo, ciñéndose en lo formal a la ritualidad dispuesta por su artículo 453, empleando facultades propias contenidas en la ley, tanto en la definición de los puntos de prueba a considerar, como en la depuración de los medios de acreditación a aparejar al juicio congruentes con aquéllos, con sujeción a lo previsto en el artículo 454 N°1 inciso 2°, dada la manifiesta omisión descriptiva detectada en la carta de despido.

Amén de lo anterior, el propio letrado pretensor de anulación ha reconocido que en el contexto de la audiencia aludida tuvo la posibilidad de reponer, tanto de la interlocutoria de prueba, como de la consecuencial exclusión probatoria debatida y finalmente ordenada, habiendo sido resueltos en tiempo y forma sus recursos verbales, pese al resultado desfavorable de los mismos a las pretensiones de la demandada a quien representa; no obstante lo cual, ello en sí no bastaría para concluir forzosamente la vulneración de alguna norma de procedimiento, pues si bien es evidente la afectación de la posibilidad de demostración de parte de su teoría del caso, tal situación devino como consecuencia de una deficiencia atribuible a su propia parte en relación a las menciones a efectuar en un instrumento fundamental inserto en el término del vínculo contractual, como lo es la carta de despido.

QUINTO: Que, a mayor abundamiento, en el motivo sexto se sintetiza de fondo el trío de hipótesis que habilitaban para el despido de un trabajador sin expresión de causa, según lo prescrito en el precepto en examen y ya expresado con antelación, en tanto en el séptimo es donde se contiene el efecto atribuido a la omisión del deber de explicitación referido, expresando: *“SÉPTIMO: Que por lo expuesto, el empleador debe acreditar en juicio que la trabajadora demandante se encontraba en alguna de las 3 situaciones que el inciso 2° del artículo 161 del Código del Trabajo y por disposición expresa del artículo 454 n°1 inciso 2° ya referido, no puede invocar, ni menos acreditar, hechos distintos a los que se señalan en la carta de despido.*

Así entonces, al no haber precisado en su comunicación de despido el hecho del cual emanaba la facultad que según él tenía derecho a ejercer y como



consecuencia de dicha omisión al no habersele permitido probar un hecho no señalado en la carta de despido, no es posible considerar que el despido ha sido justificado o procedente por lo que la demanda será acogida.”

Dicha inferencia, por lo demás, guarda lógica y plena conformidad con la armónica exégesis del tenor de ambas disposiciones analizadas en la instancia, que aparecen en verdadera relación de causa a efecto, de suerte que la precisión hipotética en la carta se hacía indispensable para viabilizar como admisible la prueba consecuencial, por lo que, “a contrario sensu” el silencio en ese aspecto se erigía en factor impeditivo para una invocación o acreditación posteriores, como aconteció en la especie.

Inclusive, aportando mayor claridad al sentido de la exigencia cuyo vigor la juzgadora enarbola, el motivo octavo de su fallo reporta en su párrafo segundo: *“El fundamento de esta resolución no solo debe analizarse desde el punto de vista de la facultad que el empleador dice detentar en este caso concreto y que ya se ha analizado, sino que además desde el punto de vista del trabajador, quien tiene derecho a conocer con precisión los hechos y el derecho en que se funda el despido de que es objeto, conocimiento que adquiere a través de la carta de despido, de manera tal de decidir o no la interposición de la demanda, actuación procesal que es, además, la única instancia en la que el trabajador puede desvirtuar los hechos fundantes del despido.”*

En efecto, no puede dejar de resaltarse que la garantía de precisión resaltada obra esencialmente en favor de la parte económicamente más débil de la relación laboral, y no sólo impera al momento de pactar en el contrato los términos de su vigencia y desenvolvimiento, sino con especial acento se hace patente a la hora de su culminación por alguna causa legal, involucrando a los hechos y al derecho invocado; por cuanto, tal como se argumentó, de ello se sigue la decisión de impugnar o no dicha actuación del empleador, por unilateral que fuere, así como, para el evento afirmativo, el enfoque que se dará a tal cuestionamiento en sede judicial, sin dejar de advertirse que la unilateralidad no puede devenir en arbitrariedad cuando el silencio ha sido completo, como se avista haber acaecido en el caso sublite.



SEXTO: Que, a partir de lo expresado, no ha sido dable a esta Corte detectar que en la tramitación del procedimiento o en la dictación de la sentencia definitiva se hubieren infringido sustancialmente derechos o garantías constitucionales, por lo que lejana está la posibilidad de acceder a la anulación pedida respecto del fallo y del proceso previo que le sirvió de fundamento, conforme a la pretensión principal expuesta.

II.- En lo que toca a la causal sustentada en el artículo 477 segunda parte, en relación a los artículos 168, 161 y 163, todos del Código del Trabajo.

SÉPTIMO: Que, seguidamente, fue traído a colación por el recurrente el capítulo de invalidación vinculado a que la sentencia *“se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*, esgrimiendo, en suma, que se infringió en el fallo el tenor de los artículos 168, 161 y 163 del texto laboral, reconociendo haber sido un hecho no controvertido fijado con el número 1 en la audiencia preparatoria: *“Que al término del contrato de trabajo se devengó a favor de la demandante \$26.676.837 por indemnización por años de servicio legal, más \$7.275.511 por indemnización por años de servicios convencional”*, lo cual también quedó consignado en el considerando segundo del fallo. Sin embargo, se reclama que el cálculo posterior efectuado en la sentencia para el pago del recargo del 30% a que fue condenada la demandada se hizo en base a la indemnización convencional y no a la legal, lo que no era procedente y significó un notorio incremento de su importe.

OCTAVO: Que, en lo que concierne al ítem anulatorio ahora esgrimido, oportuno es recordar que, según la doctrina (desarrollada a partir del recurso de casación en el fondo), se ha establecido que esa transgresión puede ocurrir de la siguientes formas: *“contraviniéndola formalmente, interpretándola erróneamente o haciendo una falsa aplicación de ella”* (Casarino Viterbo, Mario, Manual de Derecho Procesal, Tomo IV, pág. 351). Así, pues, *“Se contraviene su texto formal si la sentencia impugnada está en oposición directa al texto expreso de la ley (...) se interpreta erróneamente la ley cuando el juez, al aplicarla al caso del que está conociendo, le da un sentido o alcance diverso al que le haya señalado el legislador”*. Y existe una falsa aplicación de la ley: *“cuando el juez la aplica a una*



situación no prevista por el legislador, o bien, deja de aplicarla a un caso ya reglado” (Benavente Gorroño, Darío, Derecho Procesal Civil, pág. 223 y 224).

Enseguida, tampoco puede obviarse que la causal citada se refiere estrictamente a temas de orden jurídico, por lo que resulta ser inadmisibles alterar por intermedio de ella los presupuestos fácticos que se han consignado en la sentencia.

NOVENO: Que, acorde al marco conceptual predeterminado, considerando el mérito de las argumentaciones contenidas en el recurso y del tenor de las alegaciones orales vertidas por las partes, se desprende que en este rubro el núcleo de la controversia planteada está centrado, en último término, en determinar si la magistratura de la instancia incurrió en una infracción de ley al haber realizado el cálculo del señalado recargo en base a la indemnización convencional y no a la legal.

DÉCIMO: Que, en tal sentido, como el foco de la censura de invalidación proviene de lo expresado en el razonamiento noveno del fallo impugnado, reporta provecho para esta Corte detenerse a evaluar el contenido de las apreciaciones jurídicas vertidas en esa porción del dictamen jurisdiccional, donde se expresó: *“Que discrepa esta jueza de la limitación sobre la base de cálculo que alega la demandada, toda vez que conforme aparece del tenor literal del artículo 168 del Código del Trabajo, el incremento que se dispondrá en autos debe aplicarse sobre la indemnización a que se refieren los incisos 1° o 2° del artículo 163, esto es, la indemnización por años de servicio que las partes hayan convenido individual o colectivamente; o la indemnización por años de servicios con el tope legal que allí se establece.”*

Remata expresando en el párrafo segundo del mismo: *“En la especie, las partes pactaron una indemnización voluntaria mayor a la legal, por lo que sobre ella debe aplicarse el incremento del 30% que en lo que la especie asciende a \$10.185.704.-“*

UNDÉCIMO: Que, en este caso, del propio tenor expreso del precepto legal que sirvió de fundamento a la determinación jurisdiccional, esto es, del artículo 168 del Código del Trabajo, se aprecia que la sentenciadora ha acertado al

XMMPPLPFB8



ordenar el pago de la indemnización emanada de un despido injustificado basado en la causal del inciso segundo del artículo 161 del código del ramo, aumentada conforme a las reglas dispuestas en el inciso primero del artículo 163, de suerte que le constó que había sido estipulada una indemnización convencional, por lo que devenía natural que la cuantificación del incremento se debía calcular sobre la base de aquélla y no de la legal dispuesta en el inciso segundo de igual regla, esta ulterior que se previó únicamente para el caso de no existir la primera.

Por otro lado, aspirar a la realización de un cálculo mediante una modalidad distinta supondría de paso modificar el presupuesto fáctico del que parte la judicatura del *a quo*, en cuanto dio por establecido el pacto entre las partes de una indemnización convencional, que es lo que determinó la procedencia de esa fórmula de mayor beneficio para la trabajadora, debiendo recordar que tal mutación no resulta factible por la vía de la causal intentada.

DUODÉCIMO: Que, así las cosas, al no haberse ponderado presente tampoco el déficit de derecho denunciado a este título por el recurrente, quedará impedido también el acceso a su pretensión invalidatoria en esta arista.

III.- En lo que concierne a la causal sustentada en el artículo 477 segunda parte, en relación a los artículos 13 y 52 de la Ley N°19.728.

DÉCIMO TERCERO: Que, finalmente, en relación a similar causal invocada, esto es, infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, esta vez dirigida a invalidar la decisión jurisdiccional de devolución del descuento del aporte del empleador por concepto de AFC, resulta plenamente aplicable la aclaración conceptual ya realizada en la motivación octava.

DÉCIMO CUARTO: Que, ahora bien, estando centrada la controversia en la determinación del verdadero sentido y alcance de los artículos 13 y 52 de la Ley N° 19.728, conviene tener presente que tanto la indemnización por años de servicio como la imputación de la parte del saldo de la cuenta individual por cesantía, constituyen un efecto que emana de la exoneración prevista en el artículo 161 del Código del Trabajo. Luego, si el término del contrato por esa causal ha sido reputado injustificado por un juez laboral, simplemente no se satisface la condición, en la medida que el despido no tuvo por fundamento una de



las causales que prevé el citado artículo 13, precisamente, porque lo que justifica la imputación a la indemnización ha sido declarado injustificado,

En consecuencia, lleva razón la Sra. magistrada del grado al haber estimado improcedente el descuento a que se refiere esa regla especial, cuando la causal de despido resulta ser injustificada o improcedente, como ha acontecido en la especie.

DÉCIMO QUINTO: Que, además de lo expuesto, debe considerarse que el objetivo tenido en vista por el legislador al establecer el inciso 2° del artículo 13 de la Ley N° 19.728, fue favorecer al empleador en casos en que se vea enfrentado a problemas en relación con la subsistencia de la empresa o con el desempeño de alguno de sus trabajadores de mayor confianza, con una suerte de beneficio cuando debe responder de las indemnizaciones relativas al artículo 161 del Código del Trabajo.

De esta forma, se trata de una prerrogativa que debe ser considerada como una excepción y, por ende, su aplicación debe hacerse en forma restrictiva. Ello lleva a concluir que sólo procede cuando se configuran los presupuestos del aludido artículo 161. Por el contrario, cuando se declara por sentencia judicial que tal despido carece de causa, no es posible que el empleador se vea beneficiado con la autorización para imputar a la indemnización por años de servicio lo aportado al seguro de cesantía. Así lo ha resuelto en múltiples oportunidades la Excma. Corte Suprema en: Rol N° 36.657-2019, de 4 de febrero de 2021; Rol N° 16.806-2019, de 8 de junio de 2020; Rol N° 6187-2019, de 13 de abril de 2020; Rol N° 12.376-2019, de 25 de septiembre de 201, entre otros.

DÉCIMO SEXTO: Que, por otro lado, la tesis propuesta por el recurrente repugna con los principios *pro operario* y *nemo auditur*, pudiendo erigirse en un incentivo para invocar una causal errada, validando un aprovechamiento del propio dolo o torpeza, pues un despido injustificado -en razón de una causal impropia- produciría efectos que igualmente beneficiarían a quien lo practica, a pesar que la sentencia declare la causal improcedente e injustificada.



Ciertamente, lo expuesto pone de relieve la inconsistencia que supone que el despido sea injustificado, pero la imputación que es consecuencia del término de la relación laboral mantenga su eficacia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, así las cosas, no advirtiéndose haber incurrido tampoco el tribunal en la infracción denunciada en este rubro, el recurso de nulidad será rechazado también bajo este acápite.

DÉCIMO OCTAVO: Que, por último, ejercicio infructuoso resulta establecer la forma como los vicios que fueran desestimados en esta sede pudieron tener influjo sustancial en lo dispositivo de la sentencia, al no haber podido prosperar el arbitrio en ninguna de la tríada de sus extremos.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y siguientes del Código de Trabajo, **se RECHAZA, con costas**, el recurso de nulidad interpuesto por el abogado, don Benjamín Traviesa Lucchini, en representación de BANCO ITAU CORPBANCA S.A., en contra de la sentencia definitiva pronunciada el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, por la titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno, doña María Isabel Palacios Vicencio, la que, en consecuencia, **NO ES NULA** ni tampoco el procedimiento que le precedió.

Regístrese digitalmente, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Titular, Señor Luis Moisés Aedo Mora.

Rol N° 274 – 2021 LABORAL.





XMMP LPL FBB

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valdivia integrada por Ministro Luis Moises Aedo M., Ministra Suplente Cecilia Margarita De L Samur C. y Abogado Integrante Juan Carlos Vidal E. Valdivia, diez de enero de dos mil veintidós.

En Valdivia, a diez de enero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.